



VOL: AÑO 5, NUMERO 12

FECHA: ENERO-ABRIL 1990

TEMA: CIUDAD Y PROCESOS URBANOS

TITULO: **Aspectos teóricos y prácticos de la autogestión urbana [*]**

AUTOR: *Martha Schteingart [**]*

SECCION: Artículos

RESUMEN:

En este trabajo se parte de algunas precisiones conceptuales, se ubica de manera muy general la idea y el proyecto de autogestión dentro de una perspectiva histórica, para luego hacer referencia a algunos intentos de autogestión urbana en países latinoamericanos como Chile, Perú y México, poniendo énfasis en este último caso. En el análisis de esos intentos se marcan las diferencias entre experiencias limitadas y aquellas de mayor alcance social y se señalan coincidencias en cuanto a las enseñanzas que han surgido de los distintos casos presentados, en lo que se refiere a la percepción de que la autogestión no debe implicar para los sectores populares la renuncia a los derechos de los ciudadanos frente al Estado.

ABSTRACT:

Theoretical and Practical Aspects of the Urban Selfmanagement.

In this paper we look for some conceptual accuracy. It is placed in a general way, the idea of the selfmanagement project in a historical perspective, in order to make reference later to some urban attempts in latinamerican countries like Chile, Perú and México, making emphasis in the last one. In the analysis of this attempts, we point out the difference between limited experiences and those of larger social ranges an we show similarities in teaching forms which have emerged from the different cases introduced, refering to the perception of selfmanagement. This doesn't imply for the popular sector, the resignation to the civic rights against the State.

TEXTO

Introducción

El tema de la autogestión ha estado casi ausente en los trabajos tanto teóricos como empíricos de la sociología urbana latinoamericana y también, me atrevería a decir, de la sociología urbana en general. Ello resulta bastante lógico si se tiene en cuenta que las experiencias autogestivas en diferentes tipos y niveles de administración urbana, han sido muy limitados, y por lo tanto no han llegado a convertirse en objetos de análisis de aquellos interesados en la problemática social de las ciudades.

Sin embargo, nos ha parecido de indudable interés tomar el mencionado tema como centro de este trabajo, Primeramente, porque el término autogestión aparece mencionado, cada vez con mayor frecuencia, en trabajos referidos a los movimientos sociales urbanos o a la participación popular en las ciudades de América Latina aunque,

en general, de manera poco rigurosa y precisa, confundido frecuentemente con otros conceptos cercanos o similares; requiere, por lo tanto, algunas aclaraciones teóricas o conceptuales. En segundo lugar, porque dentro de la discusión referida al sector informal y a las relaciones entre Estado y sociedad civil en esta región también está implícita, de alguna manera, la idea de la autogestión. Por último, porque ya existen algunas experiencias autogestivas o propuestas programáticas de los sectores populares que vale la pena analizar, en el contexto más amplio de las políticas del Estado y de las luchas de las organizaciones de esos sectores.

Partiremos, entonces, de algunas precisiones conceptuales y trataremos de ubicar, en forma muy general, la idea y el proyecto de autogestión dentro de una perspectiva histórica, para luego hacer referencia a ciertos intentos de autogestión urbana en países latinoamericanos, poniendo énfasis en la experiencia mexicana. Sin embargo, los trabajos que hemos conocido de Chile y Perú también nos han proporcionado ejemplos importantes para introducirnos al análisis de la autogestión urbana en América Latina.

Se entiende por autogestión la forma de organización de las actividades sociales, tanto de tipo productivo, de servicios como administrativas, en las que las decisiones respecto de su conducción son tomadas directamente por los que participan en las mismas. Esta forma puede implicar al individuo tanto como productor en la fábrica o como consumidor en la comunidad local y trae aparejada una transformación de la estructura de las actividades, de manera que todos puedan decidir con conocimiento de causa gracias a su experiencia directa en los problemas. La autogestión también significa la superación de las diferencias entre quienes toman decisiones y quienes las ejecutan y la superación de la intervención de presiones ajenas a la colectividad en la definición del proceso decisional. Si bien la autogestión es un mecanismo social referido a actividades y decisiones de tipo no estrictamente político, resulta importante aclarar que ella no puede darse en un sentido amplio sin una profunda reestructuración del sistema político, sobre todo en cuanto a la descentralización del poder en diferentes centros de decisión (Bobbio y Mateucci, 1981).

Como ya dijimos, el término autogestión se usa muchas veces en forma indiscriminada por lo cual es conveniente distinguirlo, por ejemplo, de otra noción general como la de participación. Si bien existen diferentes formas de concebir la participación, podemos decir que ese concepto es mucho más indefinido que el de autogestión, y se aplica a un conjunto de procesos diferentes dentro de la sociedad (Fadda, 1988). [1] Asimismo, la autogestión puede darse tanto dentro del sector formal como informal de la economía, y no debe interpretarse que este último implica necesariamente la autogestión porque se da al margen del Estado, como de alguna manera lo sugieren algunas posturas neo-liberales, que han mistificado las bondades de la "informalidad".

Algunos autores han afirmado que la autogestión, en su sentido más amplio y radical, es un sistema opuesto a una sociedad de clases, significa la abolición del poder de toda minoría dirigente, y que una sociedad verdaderamente autogestionaria es más bien un modelo o una utopía (Bourdet, 1970). Sin embargo, existen indudablemente algunas experiencias autogestivas más limitadas, tanto en los países llamados socialistas como en los capitalistas desarrollados o en desarrollo y, por supuesto, es necesario distinguir el sentido y alcances de esas experiencias teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que ellas se desarrollan. Por otra parte, las ideas autogestionarias tienen distintos orígenes, los cuales se pueden ubicar dentro de los movimientos cristianos, como prolongación de un liberalismo corregido y ampliado, o dentro de las corrientes anarquista y marxista (Avron, 1980). [2]

En los países llamados socialistas las ideas y proyectos autogestionarios fueron desarrollados sobre todo en Yugoslavia, a partir de 1950. Para algunos defensores de la autogestión (Vranicki, 1975; Markovic, 1975) ella es la negación dialéctica del llamado socialismo de Estado, con sus tendencias a la burocratización; sin embargo, también afirman que esas experiencias no pueden limitarse sólo a las relaciones de producción a nivel de la empresa y las instituciones locales, ya que la completa y definitiva superación de la burocracia sólo es posible cuando los organismos centrales del estado se conviertan en organismos de autogestión. En este sentido, la introducción de la autogestión debe ser comprendida como la construcción de un largo proceso histórico. A pesar de las limitaciones y de las importantes críticas que se han realizado al modelo yugoslavo (que no podemos presentar en este trabajo), es innegable que esa experiencia ha tenido un significado histórico enorme para la humanidad en general. De hecho, la experiencia yugoslava comenzó a conocerse en muchos países, sobre todo a partir de 1968, a raíz de los grandes movimientos que tuvieron lugar en ese año, como expresión de la crisis de las sociedades capitalistas; fue justamente hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta cuando aparecieron importantes trabajos sobre la autogestión, y todos ellos se refieren de manera destacada al caso yugoslavo.

La autogestión urbana en América Latina

En América Latina se vive, en este momento, una angustiosa búsqueda de estrategias alternativas y todo parece indicar que la mayor parte de los países de la región se encuentra al final de un largo transitar entre esquemas y modelos de distinto signo que en general han fracasado y sólo han llevado a esos países a mayores niveles de pobreza, desequilibrios y malestar social. Un aspecto que parece prevalecer en la búsqueda de un nuevo enfoque para hacer frente a los problemas, es que hay que abandonar el modo de pensar tradicional, intentando un nuevo desarrollo y una nueva forma de superar lo convencional (Espinosa, 1988). Dentro de este enfoque, la idea de una organización autogestiva de la sociedad, que deje de lado esquemas burocráticos, centralistas y autoritarios, que de lugar al desarrollo de las potencialidades creadoras de las grandes mayorías y estimule más que nada la satisfacción de las necesidades de las mismas, parece difundirse en diferentes medios intelectuales y políticos, por lo menos de varios de los países latinoamericanos.

De acuerdo con la literatura que hemos consultado, los colectivos de trabajadores involucrados en procesos autogestivos han estado creciendo, en parte, como consecuencia de la crisis, de la acentuación del desempleo y de las carencias del consumo. Así, grupos de obreros, campesinos, pobladores barriales, jóvenes, mujeres, etc, se organizan y constituyen ensayos de estrategias de sobrevivencia, formas alternativas de organización del trabajo y de la vida comunal, que a veces pueden ser considerados como espacios democráticos o escuelas autoeducativas de nueva democracia o de una nueva sociedad. Estas experiencias autogestivas están vinculadas, en algunos casos, con grupos de inspiración evangélica, en otros, con antiguas tradiciones comunitarias locales y también, frecuentemente, con movimientos de orientación marxista; ellos tienen en común la idea central de conseguir para sus respectivas sociedades el desarrollo de un proceso de democratización integral que abarque las dimensiones económica, social, cultural y política de la vida nacional (Razeto y Calcagni, 1989).

Relatos referidos a las cooperativas agrarias y de servicios en el campo, a las empresas de propiedad social o cooperativas de producción y consumo en las ciudades, a las comunidades barriales autogestionarias urbanas y a las cooperativas de vivienda, nos dan la pauta de la existencia de algunas experiencias relevantes, a las que trataremos de hacer referencia más adelante; no obstante, la información resulta frecuentemente muy

limitada y sería necesario llevar a cabo una evaluación realista de las mismas, con sus éxitos y fracasos, que debería reemplazar a veces las expresiones un poco acrílicas sobre sus bondades, presentadas como la panacea para superar los problemas del subdesarrollo. Estas afirmaciones no tienen por objetivo cuestionar las iniciativas que se proponen desarrollar un modelo pluralista en lo que se refiere a los agentes organizadores de la economía y la sociedad, las formas de propiedad y los sistemas de asignación de recursos, sino señalar la importancia de conocer sus verdaderos aportes dentro de un proceso de transformación democrática de los países de la región.

En este trabajo nos referiremos más específicamente a la auto-gestión urbana, que puede ser considerada como una forma alternativa de organizar y decidir algunos aspectos fundamentales que hacen a las actividades de la ciudad y a la vida social de sus habitantes. Aunque estas actividades autogestivas están más referidas al consumo o a los servicios que a la producción misma, también consideraremos aquí algunas actividades de producción desarrolladas por movimientos u organizaciones que tienen una base territorial, a nivel de los barrios de la ciudad. En este sentido coincidimos con Calderón (1988) en que un verdadero proyecto urbano autogestivo sería aquél que está a cargo de organizaciones representativas de los pobladores, incluyendo funciones de planificación urbana local, provisión de vivienda y servicios y generación de empleo, que son asumidas colectivamente por la base social. Veremos a continuación algunas experiencias de autogestión urbana en Chile, Perú y México, en particular.

Análisis de algunas experiencias

En el caso de Chile, como consecuencia de la política económica neoliberal de la dictadura, el Estado se retiró del campo de la acción social, sobre todo para los sectores más necesitados y, además, aplicó medidas que produjeron un incremento violento de la desocupación y una baja impresionante en los niveles de consumo de amplios sectores de la población. En este contexto, las áreas urbanas empobrecidas han sido el escenario de la proliferación de una diversidad de organizaciones de pobladores: agrupaciones de tipo reivindicativo, religioso, político y cultural; asociaciones comunitarias que se plantean problemáticas urbanas, asociaciones de mujeres y jóvenes, etc. De todas estas variadas experiencias, las organizaciones destinadas a juntar esfuerzos para resolver los problemas de la subsistencia diaria de las familias, parecen las más numerosas y extendidas. Se ha afirmado, así, que "las exigencias de la reproducción física y material de los hogares populares, es la más importante fuerza movilizadora de respuestas colectivas, asociativas u organizadas de los pobladores" (Hardy, 1987). En general, este proceso se ha dado con apoyos externos a los grupos, no oficiales, y ha reunido particularmente a sectores tradicionalmente no organizados y con mayores niveles de pobreza, entre los que se encuentran las mujeres. Las organizaciones de subsistencia tienen un carácter autogestionario, con un predominio de funciones operativas para la resolución diaria de problemas y necesidades, aplicándose además mecanismos participativos y democráticos internos, como la renovación periódica de dirigentes, la participación en asambleas generales colectivas para la toma de decisiones, la obligatoriedad de informar sobre el manejo de los recursos materiales y económicos, etc. De esta manera, las mencionadas experiencias han proporcionado espacios de aprendizaje gestionario y de administración de recursos, han permitido reinsertar mano de obra calificada que había quedado desempleada y, al mismo tiempo, calificar fuerza de trabajo femenina, solucionando además algunas necesidades materiales, en un marco de fuertes restricciones materiales y en ausencia de apoyos provenientes del Estado.

En términos generales, las organizaciones de sobrevivencia han agrupado sobre todo a mujeres adultas con familia que han buscado generar algún ingreso y abaratar los costos de subsistencia; se han definido como respuestas defensivas, en niveles micro-sociales, a

través de una economía de solidaridad (Campero, 1987). Sin embargo, a pesar de que se han considerado como iniciativas insuficientes para las familias y relativamente marginales, de que se ha cuestionado su capacidad de "construir espacios alternativos legitimados" para organizar la vida económica, de que no se han hecho visibles en las poblaciones como parte de un proyecto de transformación, de que aparentemente no han mostrado potencialidades de atraer otros grupos además de los que entran a la actividad en los momentos más agudos de una crisis recesiva (Campero, 1987), parece existir un acuerdo en que ellas representan un espacio de solidaridad, sociabilidad y sobrevivencia moral, frente a un proceso desintegrador como se ha dado en Chile durante los años de la dictadura pinochetista.

En el caso del Perú, en el marco de la violencia del Estado y de los grupos insurgentes, la "democracia representativa" no ha logrado dar soluciones al empobrecimiento de la mayoría de los habitantes de ese país y allí también se presentan los procesos autogestionarios (organizaciones productivas y comunales populares) como nuevas alternativas democráticas, económicas y culturales, que podrían ir avanzando desde estrategias de sobrevivencia hacia una nueva democracia y una sociedad nueva. La autogestión presenta formas múltiples tanto en el campo como en la ciudad; algunas de ellas según esquemas jurídicos formalmente establecidos y otras ubicadas en el amplio espectro del llamado sector informal, y representaría una de las estrategias de sobrevivencia o de respuesta popular ante la crisis, con todas sus secuelas de empobrecimiento para las grandes mayorías (Moreno y Jaime O. 1988).

Durante el gobierno militar populista de Velasco Alvarado (1968- 1975) surgieron en Perú diferentes formas de autogestión controladas por el Estado, que tuvieron serias limitaciones y problemas ya que los trabajadores o pobladores no podían participar en las decisiones más importantes, mientras que los funcionarios del gobierno dirigían esas experiencias, y al final muchas de ellas fracasaron (Meister, 1982; Moreno y Jaime O., 1988). Un ejemplo interesante lo constituye el caso de Villa el Salvador, en el Área Metropolitana de Lima (Calderón, 1988), cuyo modelo autogestionario fue propuesto en 1973 por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), entidad del gobierno que "buscaba generar bases sociales de apoyo al reformismo militar". Este modelo ponía énfasis en lo productivo, a través del desarrollo de empresas comunales administradas por la "Comunidad Urbana Autogestionaria", manipulada por Sinamos, y se desdeñó, en cambio, toda acción relativa a la consolidación del asentamiento (problemas del suelo, vivienda, servicios básicos, etc). A partir de 1975, con el cambio de gobierno, las empresas autogestivas dejaron de recibir apoyo del Estado y comenzaron a entrar en crisis, mientras la población expresaba una mayor preocupación por los aspectos de la consolidación urbana, siendo el agua y drenaje, la educación y el transporte los objetivos de las movilizaciones de los pobladores, que llevaron además a su organización a independizarse del Estado. A partir de 1983 comenzó una nueva etapa para Villa el Salvador, después que la alcaldía local fue ganada por la Izquierda Unida, la que propició la idea del autogobierno popular, reconoció a la organización representativa de los pobladores y constituyó comisiones integradas por miembros del municipio y de esa organización. De esta manera el gobierno local se transformó en agente de apoyo a la autogestión, y propuso un Plan Integral de Desarrollo que incluyó tanto aspectos urbanísticos, habitacionales, recreativos, como productivos. No podemos en este trabajo presentar con detalle todos los aspectos de esta experiencia que, en general, se ha considerado positiva para los pobladores (y que constituye uno de los pocos proyectos urbanos de autogestión integral en el país); en cambio, resulta interesante rescatar algunas reflexiones que han surgido a partir del análisis de la misma (Calderón, 1988). Las dos etapas de autogestión que se han señalado para Villa el Salvador han implicado algún tipo de intervención del Estado. Sin embargo, en la primera etapa la intervención desde el gobierno central no pudo ocultar un autoritarismo que en definitiva repercutió en

un relativo fracaso de la experiencia mientras que, en la segunda etapa, la relación municipio-organización popular, basada en la cogestión y la autonomía de esta organización propició una relación más democrática y el desarrollo de un proyecto aparentemente más exitoso surgido, en gran parte, de las propias necesidades y aspiraciones de los pobladores.

En el caso de México los ejemplos de autogestión urbana son más recientes y menos desarrollados que en los casos anteriores, y existen sólo algunas pocas experiencias autogestivas más amplias, a nivel de barrio.

La idea de la autogestión urbana o los proyectos autogestivos no están todavía muy presentes dentro de los objetivos, programas y prácticas corrientes de las organizaciones del movimiento urbano popular, que atraviesa todavía, a pesar de sus importantes avances, por una etapa de tipo defensivo o reivindicativo en la que se privilegian las movilizaciones, denuncias, reuniones de coordinación, más que proyectos alternativos tanto de tipo general para las ciudades como de tipo más sectorial o parcial. Sin embargo, las ideas de autogestión comienzan a estar presentes en algunas prácticas, todavía incipientes, de esas organizaciones, sin que ellas signifiquen dejar de lado las luchas reivindicativas por vivienda, servicios urbanos, etc, o por conseguir mayores espacios políticos para los sectores populares, y una mayor democracia representativa.

De esta manera, la experiencia ha demostrado a los pobladores que no se trata sólo de autoproverse de aquellos elementos del consumo urbano que no son atendidos a través de las diferentes instancias oficiales, sino más bien de organizarse en espacios autogestivos pero al mismo tiempo de movilizarse para conseguir los apoyos necesarios del gobierno (sobre todo en lo que se refiere a la ayuda financiera para sus proyectos), luchando asimismo en el plano político para obtener una representatividad que les permita discutir y participar en las decisiones relativas a la asignación de los recursos, la fijación de prioridades, y el diseño de los planes urbanos que los afectan.

En este sentido, la posición de algunos líderes de los pobladores que hemos entrevistado, es coincidente con las enseñanzas extraídas de la experiencia chilena o peruana que presentamos más arriba, en cuanto a que la autoayuda considerada como opción excluyente de la reivindicación implica que las personas no se consideren "sujetos de derecho", renunciando así a sus derechos frente al Estado; éste, ante la imposibilidad de la autosuficiencia de los grupos más pobres, debe necesariamente de tener una presencia importante para colaborar en la satisfacción de sus necesidades esenciales. Lo importante, entonces, es considerar el tipo de relaciones que debería existir entre Estado y sociedad civil, sin renunciar a los derechos ciudadanos y reconociendo las reales limitaciones de los proyectos llamados autogestivos que sólo implican una autogestión de la miseria o la autoprovisión de medios de consumo a través de una superexplotación de la fuerza de trabajo de los pobladores urbanos.

Proyectos de autogestión urbana en México

La "participación popular" ha sido ampliamente promovida por los gobiernos locales de las ciudades mexicanas dentro de sus programas de introducción de servicios urbanos en los asentamientos populares, pero ella no se ha dado en el contexto de experiencias autogestionarias sino, básicamente, de intentos de abaratar las obras necesarias de provisión de agua, drenaje o pavimentación, por medio de la incorporación de la mano de obra de la población. Por otra parte, han proliferado pequeñas experiencias autogestivas promovidas por las organizaciones de colonos en numerosos asentamientos populares de las ciudades mexicanas, y algunas de ellas van más allá de la "autogestión de la miseria", apuntando hacia verdaderas alternativas técnicas de construcción administración y control

colectivo de los sistemas (Coulomb, 1989). Primero nos referiremos a las experiencias más limitadas, de las cuales no existe un análisis sistemático (como ocurre para el caso chileno, por ejemplo), ni una evaluación de sus éxitos y fracasos, para luego presentar algunos casos en los que la autogestión tiene mayores alcances.

En varios documentos de las propias organizaciones o en valuaciones de experiencias realizados por investigadores (Hernández, 1987; Estudios Ecuménicos, 1985, 1986, 1987, 1989, Arau Ch. 1987) se mencionan, por ejemplo, experiencias como las de "los pueblos y colonias del sur de la Ciudad de México", donde la organización de colonos, con el apoyo de las Comunidades Eclesiásticas de Base, [3] además de sus luchas reivindicativas por la regularización de la tenencia de la tierra y la obtención de algunos servicios urbanos básicos, han desarrollado actividades autogestivas referidas a la administración de tiendas CONASUPO [4] en 4 colonias; ellas representan "un centro de poder popular", que se administra colectivamente, con asesoría de grupos de profesionales elegidos por la propia organización y que, además, rinde cuentas a la comunidad de todas sus actividades. Otra experiencia destacada es la de la Cooperativa Campo y Ciudad, promovida por la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) [5] a través de la cual se está consolidando una red de intercambio y distribución de productos, sin intermediarios entre el campo y la ciudad, que permite la venta directa de productos del campo a las colonias populares organizadas, a menores costos. También se mencionan proyectos autogestivos de salud, educación, comedores populares, y pequeños talleres productivos. Como puede observarse, en general, los proyectos se orientan hacia la satisfacción de algunas necesidades elementales de los sectores pobres urbanos, sobre todo al abastecimiento de productos básicos para la subsistencia (particularmente la alimentación) y también a la provisión de servicios indispensables para la comunidad, que el Estado, en una etapa de restricción del gasto público a raíz de la crisis, ofrece cada vez en forma más limitada, sobre todo a las grandes mayorías pauperizadas, y en parte desempleadas. Entre las experiencias de autogestión urbana más avanzada existen, como ya dijimos, sólo pocos ejemplos conocidos y analizados. Quizás el más importante es el caso de El Molino que incluye un proyecto de vivienda y servicios, al que últimamente se han ido agregando empresas o talleres autogestionados. Esta experiencia se ha dado en una zona periférica de la Ciudad de México, donde proliferan los asentamientos irregulares de todos aquellos sectores de la población que no tienen acceso a la tierra fraccionada por las empresas privadas o el estado, o a las viviendas producidas a través de los distintos programas gubernamentales de interés social. El proyecto fue impulsado por una organización independiente de pobladores perteneciente a la ya citada CONAMUP, agrupaba a unas mil familias provenientes de diversos lugares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el asentamiento se produjo en un lugar llamado El Molino, cuyos terrenos fueron provistos por el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPO). una relativamente nueva institución del Estado dedicada a la vivienda popular, la que también otorgó el crédito para la realización de las viviendas. [6] El procedimiento aplicado por los pobladores fue de "administración directa", es decir que la organización era responsable de la utilización de los recursos, incluyendo la contratación de los trabajadores, la compra de materiales y el control de las finanzas. El grupo recibió, además, asesoría técnica de organismos no gubernamentales, en lo que se refiere al diseño del barrio, proyecto de servicios y viviendas, propuestas de tecnologías alternativas, sobre todo para servicios, etc. Se ha reconocido que las experiencias adquiridas han sido fundamentales para enfrentar nuevos retos en otros programas similares, y que se han obtenido valiosas enseñanzas y un instrumental metodológico que aún tiene que evaluarse conjuntamente por las partes implicadas (Suárez P. 1987). Además del programa de autogestión habitacional, que ha terminado su primera etapa, se ha comenzado a desarrollar una empresa de producción de materiales de construcción, con el objetivo de reducir costos en la construcción de las viviendas de las siguientes etapas del programa y con la idea de

apoyar posteriormente a otras organizaciones y similares; este proyecto forma parte de una plan más ambicioso de poner en marcha cadenas más amplias de producción que incluyan una empresa constructora popular y otras productoras de insumos para la construcción. Mientras tanto, la empresa ya creada fábrica bloques mediante una máquina donada a la organización, y se están iniciando además talleres de carpintería y herrería. Sin embargo, evaluaciones que se han realizado de estas iniciativas señalan algunos problemas para el desarrollo del proyecto, que consideramos importante mencionar porque, a nuestro criterio, expresan los problemas comunes a muchas empresas de ese tipo, que están tratando de llevar adelante organizaciones del movimiento urbano popular. Nos referimos, por ejemplo, al hecho que no se han asumido correctamente, por falta de experiencia, las funciones de administración, de planeación de la producción y de ventas, privilegiándose la generación de empleo entre los integrantes de la organización, lo cual produce un número excesivo de empleados. El balance que se ha efectuado de esta experiencia es que, además de dar solución a algunos problemas básicos de los sectores pobres urbanos, representa una excelente oportunidad para la formación y entrenamiento de los pobladores que, de esta manera, aprenden a organizar la producción de su vivienda, a gestionar los servicios y a organizar a su comunidad a nivel del asentamiento. Por otra parte, el proceso político que está ocurriendo en el país estaría abriendo la posibilidad de que representantes del movimiento urbano popular lleguen a ocupar cargos de representación popular (como alcaldías en los municipios) y para ello es necesario contar con experiencias autogestivas de promoción y administración urbana. (Suárez P., 1987).

Algunas reflexiones finales

Después de esta muy rápida revisión de experiencias urbanas autogestionarias en países de América Latina, quisiéramos concluir con algunos comentarios comparativos de las mismas y con algunas reflexiones en cuanto su significado en un proceso de transformación democrática de esas sociedades.

Como hemos visto, la experiencia chilena se ha dado en el marco de una situación de autoritarismo político y de liberalización económica, en la que el Estado ha dejado de participar en la reproducción, aunque fuera mínima, de la fuerza de trabajo y los pobladores pauperizados, a veces con la ayuda de la Iglesia Católica o de otros agentes externos, han tenido que asumir, a través de organizaciones de autoayuda y autoempleo, su propia subsistencia. En el caso peruano, en un contexto de mayor democracia política (en el que incluso han existido experiencias de gestión municipal de grupos de izquierda), el tremendo deterioro económico y la violencia desatada sólo dejan, por el momento, un saldo muy limitado de esas experiencias, aún cuando deben reconocerse los avances realizados por las comunidades organizadas.

En México, con una tradición mucho más limitada de autogestión y, sobre todo, con un desarrollo más reciente de un movimiento urbano popular combativo e independiente, los casos de experiencias autogestivas urbanas son, en general, más incipientes y menos numerosas. Sin embargo, la fuerte crisis económica que se ha acelerado desde 1982, la apertura política y el lento proceso de democratización, han producido un importante avance de las organizaciones populares independientes, que ya comienzan a plantear interesantes proyectos autogestivos, los cuales se acompañan, además, de luchas reivindicativas por un mayor acceso al consumo urbano y a la participación política, sobre todo a nivel del Gobierno de la Ciudad de México.

Si bien existen coincidencias, como señalamos más arriba, en el sentido de que la organización de los sectores populares en espacios autogestivos de ninguna manera implica renunciar a sus derechos frente al Estado y a la lucha reivindicativa, de hecho

existen diferencias importantes en cuanto a la relación entre los grupos autogestionarios y el poder público en los tres casos considerados. Mientras en Chile esos grupos se han movido en forma completamente independiente del Estado, habiendo recibido sólo ayuda del exterior o de la Iglesia, en el caso peruano la mencionada relación llegó a la cogestión con un gobierno local de la Izquierda Unida. Sin embargo, el tema de la relación entre Estado y grupos autogestionarios plantea problemas importantes a discutir, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de superar la intervención de presiones ajenas a la colectividad en la definición del proceso decisional, como indicábamos al comienzo de este trabajo; por supuesto que esa relación dependerá del sistema político vigente en cada caso.

En cuanto al significado de estas experiencias dentro de un proceso de transformación democrática de los países, existen diferentes visiones de las mismas, según la posición política e ideológica de los observadores o de los agentes involucrados. Las posiciones más optimistas, presentadas mayormente por los "militantes" de la autogestión, algunos de ellos de orientación evangélica, ven en estas experiencias un camino para la democratización integral de las sociedades latinoamericanas, y estiman que crear espacios democráticos al interior de empresas u organizaciones de base, aún cuando estas sean pequeñas y de escasa proyección a nivel nacional puede tener en el largo plazo un efecto relevante en el cambio social. En el otro extremo, los grupos políticamente más radicales insisten en lo limitado de esos ensayos, si no se combinan con un proceso de cambio a nivel del sistema económico y político global, para que no queden sólo como experiencias aisladas, mientras las grandes decisiones continúan tomándose al margen de las grandes mayorías. Quizás una evaluación más matizada y realista de la autogestión podría ser aquella que considera la necesidad de estimular la creación de espacios democráticos, que se constituyan en escuelas de participación y formación de amplios sectores de la población (además de colaborar en la solución de las necesidades básicas de la población empobrecida), pero al mismo tiempo no pueden ser vistas como el factor más decisivo del desarrollo, porque éste debe involucrar al conjunto de la sociedad. Por otra parte, la autogestión para la subsistencia, tal como se da en muchas experiencias latinoamericanas, si bien está muy lejos del modelo de sociedad autogestiva que mencionamos al comienzo de este trabajo, implica frecuentemente "un elevado nivel de desarrollo de las propias necesidades de trabajo y de autogestión, y es un error minimizarlo o contraponerlo a lo que serían las actividades de desarrollo" (Razeto, 1986).

CITAS:

[**] Agradezco la colaboración de Rosa María Broun en la revisión del material bibliográfico que sirvió de base a este trabajo.

[*] El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano

[1] Se habla muchas veces de participación para referirse indistintamente al hecho de limpiar la calle, emitir un voto, intervenir en un movimiento social urbano, gestionar una empresa, formar parte de consejos obreros, etcétera. Esta ambigüedad produce una enorme confusión, ya que se aplica a procesos totalmente diversos. Más específicamente, la Participación obrera o la democracia participativa son conceptos que deben diferenciarse de la autogestión en la fábrica o en el plano más político, ya que implican conceptos más limitados (Markovic, 1975).

[2] Este autor se refiere a los movimientos que continúan la acción del Papa León XIII y la Encíclica Rerum Novarum en las que se menciona la participación de los asalariados en las empresas para terminar con los "excesos del capitalismo". En cuanto al marxismo clásico se señala que éste muestra una gran indecisión con respecto a la propuesta

autogestiva, ya que se ubicaría a medio camino entre la lógica del Partido, que ejerce una acción de arriba hacia abajo, y la espontaneidad representada por las masas que impulsan la revolución de abajo hacia arriba.

[3] Estas comunidades, que han tenido particular desarrollo en el Brasil, también han comenzado a crecer en México, y sobre todo en los últimos años, han aumentado su presencia en los asentamientos urbanos populares, donde realizan tareas de tipo educativo y de apoyo a la movilización de los pobladores. Si bien se trata de grupos de inspiración religiosa, en México sus miembros están adoptando últimamente una posición de mayor compromiso político, no como comunidades eclesíásticas sino como individuos. En algunos casos su actividad ha sido positiva para el desarrollo de organizaciones de base (Revista Estudios Económicos varios números).

[4] Las tiendas CONASUPO (Comisión Nacional de Subsistencias Populares) pertenecen a un sistema de comercialización de productos básicos para la subsistencia de los sectores populares organizado por el Estado; en algunos lugares, donde esas tiendas no existen, se dejan en manos de la comunidad organizada; sin embargo, últimamente la CONASUPO ha tratado de frenar este tipo de experiencias.

[5] Esta Coordinadora se creó en 1980 y desde entonces ha realizado avances importantes en diferentes lugares del país, apoyando a diversas organizaciones locales, tratando de aumentar su área de influencia, organizando reuniones nacionales del movimiento, etcétera. Sin embargo, en los últimos años, ella ha entrado en crisis, sobre todo en la Ciudad de México, frente al avance de algunas otras organizaciones, entre las que se destaca la Asamblea de Barrios, que surgió en 1987, desarrollando nuevas estrategias para el movimiento urbano popular, particularmente en lo que se refiere a su vinculación al reciente proceso político del país.

[6] Es importante aclarar que en parte el éxito de este proyecto se debe al hecho de haberse conjugado la iniciativa organizada de los pobladores, a través de una organización con experiencia en este campo, con el apoyo de un organismo de vivienda del Estado que, por razones coyunturales, ha desarrollado una política más amplia de vivienda que las demás instituciones existentes en el país, sobre todo en cuanto a la adjudicación de créditos para vivienda a grupos organizados que no pertenecen al partido oficial.

BIBLIOGRAFIA:

Arau Ch. Rosalinda, "Organización de los pueblos y colonias del sur", en Revista Mexicana de Sociología, vol. XLIX, número 4, Octubre- Diciembre, 1987.

Avron Henri, L'Autogestion, Presses Universitaires de France, 1980, París.

Bobbio N. y Matteucci N., Diccionario de Política, Siglo XXI, 1981, México.

Bourdet Yvon, La Délivrance de Prométhée (pour une théorie politique de l'autogestion). Editions Anthropos, París, 1970.

Campero Guillermo, Entre la sobrevivencia y la acción política Las organizaciones de pobladores en Santiago. Estudios ILET, Santiago, 1987.

Calderón Julio, "Reflexiones sobre los modelos de autogestión urbana popular en Perú: el caso de Villa El Salvador", ponencia presentada en la Conferencia Internacional "Trends and Challenges of Urban Restructuring", Septiembre, 1988. Río de Janeiro, Brasil.

Coulomb René, "Estrategias de sobrevivencia o prácticas autogestionarias?", ponencia presentada en el Seminario Internacional: Servicios Urbanos, Gestión local y Medio Ambiente. El Colegio de México, Julio, 1989.

Egaña Rodrigo, De taller a empresa de trabajadores. La experiencia de SERVATEC Colección experiencias populares. programa de economía del trabajo (PET). Academia de Humanismo Cristiano. Santiago de Chile.

Equipo pueblo, "Las estrategias de sobrevivencia como prácticas transformadoras", ponencia presentada en el Seminario Nacional sobre Estrategias de Sobrevivencia, en Revista Pueblo, 146, Agosto, 1989.

Espinosa Juan G. "Hacia una economía participativa", en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, número 13-14, Primavera-Verano 1988, España.

Guimaraes Roberto, "La preocupación por la equidad: políticas y obstáculos para el desarrollo social en América Latina", en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, número 15, Otoño 1988, España.

Guimaraes Roberto, "Participación comunitaria, Estado y desarrollo: el difícil arte de conciliar lo conflictivo", en Revista Interamericana de Planificación, número 83-84, Diciembre, 1987, SIAP, México.

Hardy Clarisa, Organizarse para vivir. Pobreza urbana y organización popular. Programa de Economía del Trabajo (PET), Santiago de Chile, 1987.

Hernández Ricardo, La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Su historia:1980-1986,

Klenner A. y Razeto L., Manual del taller autogestionado, Biblioteca del Fondo de pequeños proyectos de Desarrollo. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 1985.

Markovic Mihailo, "Philosophic fundamentals of the idea of selfmanagement", in Self Governing Socialism, edited by B. Horvat, M. Markovic and R. Supek, International Arts and Sciences Press, New York, 1975.

Markovic Mihailo, "Socialism and Self-management", in Self Governing Socialism, edited by B. Horvat, M. Markovic and R. Supek, N.Y. 1975.

Meister Albert, "Acerca de la Autogestión", en Revista Socialismo y Participación, número 18, 1982, Perú.

Montalvo Abner, "De la participación a la autogestión", en Revista Socialismo y Participación, número 13, 1981, Perú.

Moreno W. y Jaime O.G. "Estado, crisis y autogestión en el Perú durante la administración del APRA: una propuesta de pacificación nacional", en Revista Iberoamericana de Autogestión y acción Comunal, número 15, Otoño 1988, España.

Razeto Luis, "Las organizaciones económicas populares. Más allá de la subsistencia", en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, número 7, Spring 1986.

Razeto Luis, Empresas Alternativas. Manuales de Educación Popular. Programa de Economía del Trabajo (PET), Academia de Humanismo Cristiano. Santiago de Chile.

Razeto L. y Calcagni R., Para un proyecto de desarrollo de un sector de economía popular de solidaridad y trabajo, Programa de Economía del Trabajo (PET), Fundación Solidaria, Trabajo para un Hermano.

Revista estudios ecuménicos, números 2 and 3 (1985), 6 (1986), 10 (1987) and 17 (1989). Diversos artículos sobre las comunidades eclesíásticas de base y el movimiento urbano popular en México.

Suárez P. Alejandro, "La gestión social de la producción de vivienda. Una posible fuente generadora de empresas urbano-populares", Cuadernos del Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI) 5.